



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

### **S23-257**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN AUTO.  
Demandantes: **JORGE ALONSO CASTRILLÓN TORO** quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas **MARÍA CAMILA** y **MARÍA JOSÉ CASTRILLÓN OSORIO**.  
**DANIELA CASTRILLÓN OSORIO**  
**MARÍA DEL SOCORRO OSORIO GÓMEZ**  
Demandado: **MASIVO DE OCCIDENTE S.A.S.**  
Radicado No.: 05001-31-05-005-2019-00371-01.  
Decisión: **CONFIRMA** auto que da por no contestada demanda

Link: [05001310500520190037101](https://expediente.digita.gov.co/expediente/05001310500520190037101) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **MASIVO DE OCCIDENTE S.A.S.** contra la decisión mediante la cual se dio por no contestada la demanda.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 39** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

Pretende la parte actora la indemnización plena de perjuicio en los montos que reseña, con ocasión al accidente de trabajo que implicó, para el señor Alonso Castrillón Toro, una pérdida de capacidad laboral de un 20.99% debido a un esguince de tobillo derecho, y que posteriormente generó su reubicación en cargo diferente al contratado (conductor), que desencadenó en renuncia.

El 22 de julio de 2019 se ADMITIÓ la demanda (fl. 561 archivo 01), surtiéndose la notificación personal de la misma el 20 de noviembre de 2019 a quien acreditó su condición de apoderado de la sociedad MASIVO DE OCCIDENTE S.A.S. (fl. 571 archivo 01), así:


REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO

Medellín, 20 noviembre / 2019.

**ACTA DE NOTIFICACIÓN  
PROCESOS ORDINARIOS**

En la fecha se notificó el Sr. (a) Hermano Páez Moreno Gómez  
identificado(a) con la CC 98.500.819 y portador(a) de la TP 89804.  
en calidad de Apoderado Masivo de Occidente SAS.  
del auto de fecha 22 julio de 2019, por medio del cual se  
admitió el proceso promovido por Jorge Alonso Estrillo  
en contra de Masivo de Occidente SAS. conocido con el  
Radicado 2019-371.

Se entrega de una copia de la demanda y se le pone de presente al notificado que  
cuenta con un término de diez (10) días hábiles para formular contestación.

Firma quien se notifica:  


Firma del empleado que notifica:  
Jorge

El 18 de diciembre de 2019 la sociedad demandada radicó la contestación e incluso en escrito separado llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Mediante auto proferido el 13 de agosto de 2021 (archivo 02) aunque el despacho advirtió la extemporaneidad de la radicación del escrito, admitió el llamamiento en garantía y dio por contestada la demanda en los siguientes términos:

“(…) se tiene que, mediante memorial del 18 de diciembre de 2019, el señor apoderado de la demandada allega contestación a la demanda obrante entre folios 288 al 292 exp. Físico.

No obstante, previo a iniciar el estudio de admisibilidad de la referida contestación, se permite concluir que la misma fue presentada por fuera del término concedido por la Ley para ello. Afirmación, que se extrae del hecho que el señor apoderado de la entidad demandada se notificó de manera personal el 20 de noviembre de 2019, tal y como se

vislumbra del folio 286 exp. físico, siendo la fecha máxima para presentar la contestación de la demanda el 04 de diciembre de 2019.

En razón de lo expuesto, se tendrá por CONTESTADA la demanda por parte de MASIVO DE OCCIDENTE S.A.S.; sin embargo, en aplicación de las consecuencias procesales del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social - C.P. del T. y de la S.S., parágrafo 3º en concordancia con el parágrafo 2º ibídem, se tendrá como un **indicio grave** en contra de la demandada MASIVO DE OCCIDENTE S.A.S.  
(Resaltos del juzgado)

Sin embargo, el 9 de agosto de 2023 (archivo 13), tras efectuar un control de legalidad, dio por no contestada la demanda y ordenó la desvinculación de la entidad llamada en garantía

Contra dicha decisión la demandada interpuso y sustentó recurso de apelación.

## 2. ARGUMENTOS

### 2.1.DEL JUEZ AL DAR POR NO CONTESTADA LA DEMANDA

Expresamente indicó que:

Ahora bien, previo a resolver sobre lo anterior, a esta altura del trámite, evidencia el Despacho la necesidad de aplicar control de legalidad, conforme lo autoriza el artículo 132 del CGP, en el entendido de declarar nulo el auto del 13 de agosto de 2021, mediante la cual, se consideró como contestada la demanda por parte de la sociedad MASIVO DE OCCIDENTE SAS, pero con indicio grave en su contra; y, se admitió el llamamiento en garantía realizado a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA.

Como ya se indicó, en dicha providencia, el Juzgado señaló que la sociedad traída a juicio, presentó contestación a la demanda de manera extemporánea, pues se notificó de manera personal el 20 de noviembre de 2019, tal y como se vislumbra del folio 286 exp. físico, dando respuesta a la demanda mediante memorial del 18 de diciembre de 2019, evidentemente por fuera del término legal para hacerlo, siendo la fecha máxima para presentar la contestación el 04 de diciembre de 2019; sin embargo, el Despacho admitió dicha contestación, y le adjudico como consecuencia de la extemporaneidad, el indicio grave en su contra.

Lo anterior, evidencia que esta judicatura debe proceder a realizar el autorizado control de legalidad (art. 132 del C. G. del P.) a la providencia señalada; y, en consecuencia, asumir como saneamiento, que la decisión criticada en el párrafo anterior no puede tenerse por un acto procesal válido y debe anularse. Es que, para esta judicatura, el hecho de haber dado respuesta a la demanda de manera extemporánea implica tenerla por no contestada; y, en consecuencia, esta debe ser la decisión correcta que se debió tomar por este Servidor al respecto, y consecuentemente, rechazar el llamamiento en garantía, ya que, como lo indica el artículo 64 del CGP, el llamado en garantía debe realizarse con la demanda o dentro del término para contestarla.

Resáltese que el principio de legalidad se asume como garantía del ciudadano; y, en armonía con ello, el Juez laboral, cumple su deber de custodiar el cumplimiento de los diversos postulados integradores del derecho fundamental al debido proceso, garantía que es de aplicación inmediata. En ese mismo sentido, extender los términos de las actuaciones, implica excederse en garantías; lo cual, lleva al desequilibrio del proceso.

Por las razones ya expresadas, se declara nulo parcialmente el auto fechado del 13 de agosto de 2021, y la subsecuente actuación derivada de esta providencia, es decir, el

auto del 6 de julio de 2022, por lo que se tiene POR NO CONTESTADA LA DEMANDA por parte de la sociedad MASIVO DE OCCIDENTE SAS, teniéndose esto como un indicio grave en su contra, tal y como lo consagra el parágrafo 2° del artículo 31 del CPTSS.

Consecuente con lo anterior, ante la falta de contestación a la demanda, el llamamiento en garantía realizado a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA y la respuesta emitida por la misma, no tiene respaldo en la actuación del proceso, por lo que, en clara consecuencia de la decisión de nulidad ya señalada, se desvincula a dicha sociedad y no se tendrá en cuenta su intervención para los efectos de esta Litis.

## 2.2.RECURSO DE APELACIÓN

En virtud del principio de legalidad y confianza legítima, el cual define, no es dable que, tras casi dos años de haberse emitido el auto, se declare una nulidad, lo que además afecta ostensiblemente las garantías procesales, impidiéndosele debatir los argumentos esgrimidos en la demanda, menoscabándose su derecho de defensa. Considera que la consecuencia de la extemporaneidad es indicio grave en contra conforme lo previsto en el art. 31 del CPT y la SS, para no vulnerar el debido proceso según el cual toda persona podrá a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, y no se está dando la oportunidad para que en este caso la parte demandada presente sus argumentos en escrito pertinente frente a la demanda presentada.

Expuso que el principio de confianza legítima constituye un criterio que permite que el administrado confíe en que una situación de hecho que ha venido siendo tolerada por la administración se mantendrá, buscando amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien sea que se trate de conductas activas o pasivas de la administración pública.

Además, considera que las actuaciones proferidas por los jueces se deben dar en plazos razonable, tornándose improcedente deja sin efecto su propia actuación dos años después. Añade que el principio de legalidad, referido por el a quo en su providencia, debe opera para ambas partes, aspecto en el que destaca que ni el mismo demandante interpuso recurso alguno frente al auto que admitió la contestación de la demanda y el llamamiento en garantía, y este sería el directo interesado de controvertir una situación anómala en el auto que admitió dicha contestación si era que consideraba que sus derechos procesales se estaban vulnerado.

De esta manera solicita se deje en firme el auto que dio por contestada la demanda y admitió el llamamiento.

2.3.ALEGATOS

Ninguna de las partes presentó alegatos.

3. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 1º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada*.

Tenemos entonces que el problema jurídico consiste en determinar cuál es la consecuencia de contestar extemporáneamente la demanda.

Antes de resolver la dubitativa planteada debemos precisar que realmente NO existe discusión en cuanto al término con el que contaba la sociedad llamada a juicio para contestar. Bastaría con acudir al art. 74 del CPT y la SS, norma cuyo tenor es:

ARTICULO 74. TRASLADO DE LA DEMANDA. <Artículo modificado por el artículo 38 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un **término común** de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados.  
(Resaltos de la Sala)

Conforme la acertada contabilización del despacho, el término para responderla venció el 4 de diciembre de 2019, toda vez que se surtió la notificación personal el día 20 de noviembre del mismo año, de ahí que cuando se radicó el escrito de contestación el 18 de diciembre, ya habían transcurridos más de los 10 días que otorgó el legislador.

Noviembre							Diciembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				1	2	3							1
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					

El problema estriba, como se dijo, en establecer cuál es la consecuencia procesal de cara a lo previsto en el art. 31 de la misma codificación, que regula la forma y requisitos de la contestación de la demanda, en cuyo parágrafo segundo se estipula que:

**La falta de contestación** de la demanda dentro del término legal se tendrá como **indicio grave en** contra del demandado.

(Resaltos de la Sala)

Destáquese un primer aspecto, y es que en parte alguna de la preceptiva en comento se indica que la extemporaneidad implica darla por contestada. Incluso lo que prevé el artículo es que la ausencia de contestación, cualquiera sea la causa de ello (radicarla por fuera del plazo legal o no presentarla), acarrea una consecuencia procesal adicional: tenerla como indicio grave en contra.

La Corte Constitucional analizó la exequibilidad de la norma a través de sentencia C-102 de 2005, oportunidad en la que indicó que cuando una persona en ejercicio de un derecho constitucional, acude a la administración de justicia con el fin de hacer valer ante un juez determinadas pretensiones y se da inicio a un proceso laboral, nace para la persona contra la que se dirige la demanda **el pleno derecho de defenderse** – artículo 29 de la Carta, en la forma prevista por la ley para el proceso de que se trate. Y añadió:

Tal como está regulado el procedimiento civil, el demandado una vez debidamente notificado de la demanda, debe hacer una manifestación general sobre su contenido y expreso sobre las pretensiones, con el fin de que el juez pueda delimitar desde el principio, las posiciones de las partes, facilitar la actividad probatoria y establecer cómo dirigirá el funcionario judicial los poderes que le otorga la ley en cuanto al decreto y la práctica de pruebas, el impulso del proceso, y, hacer realidad la igualdad de las partes. Toda esta actividad de las partes y del juez está enmarcada en las disposiciones del C. de P.C.

(...) En otras palabras, la mera circunstancia de que no se conteste la demanda o no se acuda a los interrogatorios decretados como prueba en el proceso, no implica *ipso facto*, que la presunción o el indicio que esta conducta implica, según la ley, conduzca a que el juez se vea impelido a dictar sentencia desfavorable a los intereses de quien actuó de esa manera, porque llevan consigo una confesión obtenida en violación del principio de no autoincriminación

(...) Es decir, la no contestación de la demanda será tomada en cuenta por el juez como una de las conductas para deducir indicios (art. 249 del mismo Código), indicios que por mandato de la ley, deberán ser apreciados en *conjunto* por el juez "teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso" (art. 250 *ibídem*).

Así las cosas, como existe norma especial, la **falta** de contestación en materia laboral, contrario a lo que prevé el Código General del Proceso en su art. 97, NO implica que se presuman ciertos los hechos susceptibles de confesión, solamente indicó grave en contra como acertadamente lo estimó el juez de primer grado.

No se trata pues, como lo interpreta el recurrente, aun bajo el matiz del tiempo transcurrido o el principio de confianza legítima, que el juez deba mantenerse en su error y atribuirle a la extemporaneidad con la que fue radicada la contestación, una consecuencia diferente a la legal. Evidentemente la convocada a juicio verá afectado sus intereses de cara a su tesis de defensa, pero si ello sucede NO es por capricho del juez, sino por la pasividad de la propia parte que dejó transcurrir los términos de ley para pronunciarse. Caso diferente será, si el operador jurídico en primera instancia, en uso de sus facultades oficiosas, decide nutrir el debate probatorio incorporando los medios de prueba que a bien tenga, o practicando los que considere pertinentes, útiles o necesarios, poder dispositivo, pero ello NO implica, bajo ninguna circunstancia, que tenga por contestada la demanda, pues de hacerlo, sí lesionaría el derecho fundamental al debido proceso, que precisamente sirve de soporte a la recurrente en su intervención.

Este derecho debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el **respeto a las formas propias de cada juicio**. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra, indicando entre otros conceptos que éste se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es por ello que las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una **regulación jurídica previa que limite los poderes** del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que **ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio**, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

De conformidad con lo anterior, el debido proceso se vulnera cuando no se siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cubija a las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos también quedan obligados por las normas que regulan el juicio o la actuación sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los benefician y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables.

Quiere esto decir que ese respeto por las formas propias de cada juicio, claramente abarca su acatamiento, y si la contestación, para el caso que nos ocupa, NO se radicó dentro de los 10 días siguientes al momento de surtirse la notificación personal, la llamada a juicio debe someterse a las consecuencias que prevé la ley que implica, entre otras, darla por no contestada.

En consecuencia, se confirmará la decisión objeto del recurso de alzada. Se condenará en costas a la entidad recurrente por no haber tenido éxito en la apelación, fijándose como agencias en derecho la suma de \$500.000.

**4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión proferida el 9 de agosto de 2023 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín a través de la cual dio por no contestada la demanda a la sociedad **MASIVO DE OCCIDENTE S.A.S.**, dentro del proceso ordinario laboral instaurado en su contra por el **JORGE ALONSO CASTRILLÓN TORO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro.71.632.306, y otros, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** costas a cargo de la sociedad demandada. Se fija como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 203 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.  
Medellín 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>